

Imprimir

La demostración de fuerza del Clan del Golfo, después de la forzada extradición de Otoniel hacia una cárcel de Estados Unidos, que paralizó once departamentos y un centenar de municipios durante cuatro días, no deja dudas del fracaso de la guerra contra las drogas. Este paro armado donde los facciosos se paseaban prácticamente horondos y desafiantes, sin resistencia, por media Colombia, demuestra, una vez más, el poder del narcotráfico en la vida colombiana que corroe los cimientos de toda la sociedad y de todas sus instituciones. El narcotráfico, y sobre todo la hipócrita ilegalidad de este negocio en beneficio de los grandes intereses globales de Washington, está balcanizando el país. El Clan del Golfo domina el territorio desde el noroeste antioqueño, el Bajo Cauca, la región de Urabá y su influencia se siente prácticamente todos los departamentos de la costa caribe, con gran ascendiente en sus capitales. Esta organización delictiva junto a otros clanes y franquicias del narcotráfico, disidencias y el ELN, controlan desde el Chocó, con su capital Quibdó- víctima de una atroz violencia que se lleva de tajo preferencialmente a sus jóvenes- hasta Nariño y todo el litoral Pacífico.

En Cali, Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Jumbo, Buga, Cartago, Tumaco, la violencia muestra su macabra faz todos los días, cortando de tajo la vida de dirigentes indígenas, líderes ambientales, casi que en la más absoluta impunidad. En muchas poblaciones centrales de la región Pacífico y en el litoral la autoridad la ejercen de facto las fuerzas irregulares en todas sus distintas denominaciones. En el Oriente del país ni se diga. La torpe política exterior del gobierno Duque le entregó la frontera con Venezuela al crimen en sus distintas manifestaciones y el Norte de Santander y el Catatumbo son tierras de nadie. Igual ocurre en Arauca, Vaupés, el Guaviare.

Y las ciudades colombianas son presa de una enorme y creciente inseguridad. En Cartagena el hambre empuja a los desarraigados de la fortuna hacia las redes del crimen y la intolerancia social.[1] Es desafiante el turismo de alto coturno en un entorno de profundas brechas sociales. El narcotráfico, y con ello el sicariato, alimenta la hoguera de la violencia en la Heroica en la disputa por el control de los puertos por donde sale el grueso de la cocaína hacia los mercados internacionales. Los largos brazos del narcotráfico que se

extienden a toda América Latina le propinó un golpe mortal al turismo con el asesinato del fiscal del Paraguay, de luna de miel en sus paradisíacas playas.

En Bogotá se está volviendo común que aparezcan cuerpos desmembrados en bolsas de plásticos.[2] Las bandas criminales asociadas al macro y micro tráfico crecen en la capital y ello explica el auge de la violencia y la inseguridad. En la capital colombiana se habla de la existencia de casas de pique o casas de masaje. En Cali las estadísticas de muerte son macabras. En Medellín y Antioquia la violencia no amaina.

Lo que muestra la cruda realidad de la violencia y el apogeo del narcotráfico en Colombia es que el Ejército Nacional no controla buena parte del territorio. El país está lejos de una condición suprema de la modernidad: el monopolio de las armas. En este paro armado, según la Fiscalía de la JEP, 24 personas perdieron la vida, 138 comunidades quedaron confinadas, hubo 26 bloqueos de vías y 118 bienes de la población civil fueron destruidos. El Clan del Golfo controla 211 municipios de Colombia y moviliza entre el 30 y el 60% de la cocaína que se produce y se trasiega por nuestros campos y ciudades y hacen parte de las exportaciones colombianas más rentables, que alimenta, por diversos canales, sectores productivos enteros de nuestra economía.

Ni siquiera esta vez sirvieron las agotadas caravanas escoltadas por fuerzas combinadas del Ejército y Policía porque el control de muchas vías principales del país y de las regiones fueron controladas por esta fuerza irregular, que prácticamente las paralizan cuando quieren. El ejército siempre llega tarde a todo, no tiene la iniciativa, carcomido por la influencia en sus filas del poder corruptor del narcotráfico, como se ha evidenciado en los últimos meses.

La entrevista del valiente alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, concedida al Canal Caracol, muestra el manejo torpe e irresponsable como el Gobierno Nacional condujo esta ofensiva del Clan del Golfo. Ante un reclamo del burgomaestre por el abandono del Estado a su municipio y a los municipios de todo el noreste antioqueño, en un Consejo de Seguridad en Santa Fé de Antioquia, el prepotente Ministro de Gobierno le respondió que qué esperaba del Gobierno Nacional un alcalde de origen Liberal. Insólito. Indignante. Un gobierno serio,

del que carecemos, lo hubiera destituido de manera fulminante.[3]

Es extraño, por decir lo menos, que el Ejército y el Gobierno Nacional no haya previsto la reacción del Clan del Golfo ante la extradición de su comandante, quizás prevalido de su desbordada e irresponsable autosuficiencia de aniquilar estas organizaciones pero solo en los discursos oficiales. Igual como cuando, producto del Acuerdo de paz, las FARC entregó armas y hombres en sus zonas de influencia y el Ejército Nacional no copó el territorio. ¿Dónde están sus estrategias?

O, como se rumora, ¿el Gobierno Nacional busca un pretexto para suspender las elecciones ante la derrota inevitable de su deleznable candidato? El Gobierno juega con fuego. El pasto del bosque está seco. Basta con que alguien arroje un fósforo y esto se enciende. La gente está angustiada y furiosa en un país que se deshace.

O su inoperancia e ineffectividad se explican como un hecho deliberado para mantener la hoguera de la guerra contra las drogas como un instrumento a disposición de Washington contra Venezuela y Nicaragua, alineados sin reservas con Moscú ahora que a Duque se le da por desafiar a Putin al servicio de los intereses estratégicos de la Casa Blanca y meter al país en una sin salida? Con Duque y los vecinos tenemos a Ucrania más cerca de lo que parece.

La única forma que Colombia se libere de este negocio ilegal y de las graves implicaciones que esto tiene para el país es su legalización, así esto suene políticamente incorrecto. O a ciertos comentaristas les dé náuseas. No hay otra manera. Porque implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDT, inmersos en el Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos, implican una refundación económica del país, desarrollar el campo, reconstruir la industria, lo que supone redefinir los tratados de libre comercio que acabaron con estos soportes insustituibles del desarrollo de la nación. Y superar las concepciones económicas de la austeridad, de las reglas fiscales, que todo lo ahogan.

Aun, si esto se cumpliera a cabalidad en el corto y mediano plazo, el negocio prevalecerá mientras que haya en el mundo narices dispuestas a consumir el polvo de la tierra. Esto lo

demuestra el fracaso de los programas de sustitución de cultivos, engendro de la prohibición, en el que están de acuerdo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno colombiano y distintas ONGs que comparten esta candidez.

[1] Hay relación entre la pobreza y la violencia homicida en Cartagena, El Espectador, mayo 3 de 2020, Pág.20

[2] Tras las pistas de las muertes sistemáticas, El Espectador, 12 de mayo de 2022.Pág.7

[3] Entrevista Noticias Caracol al Alcalde de Frontino. Dura crítica del alcalde de Frontino al presidente Duque. https://youtu.be/_IM8X8_bVHO

Fernando Guerra Rincón

Foto tomada de: Caracol Radio